AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

D. MARIANO SANZ LORIENTE, en su calidad de secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), entidad domiciliada en C/ Diego de León, 50 - 2ª planta, 28006-Madrid y con DNI 39662832E, comparece y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), y mediante el presente escrito formalizo

RECLAMACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

Prevista en los artículos 119 y siguientes de la Ley 3/2020 contra el **Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) de ADIF – Consejo de Administración**. para la “PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CANAL DE ACCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA, DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE VALENCIA – JOAQUÍN SOROLLA Y DE LA AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DE VALENCIA – JOAQUÍN SOROLLA”, Número de Expediente **4.22/20830.0195**, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El valor estimado del contrato asciende a **453.759.550,72 EUR**. Recurso que se basa en las siguientes:

ALEGACIONES:

PRIMERA. - *Inclusión de obligaciones esenciales y condiciones de ejecución del contrato incompatibles con el ordenamiento jurídico:*

En el pliego se contienen obligaciones esenciales para la ejecución del contrato que no cumplen los requisitos de la Ley 3/2020. En las cláusulas 29 y 39 del pliego se establece lo siguiente:

“Cláusula 29. Integridad y lucha contra el fraude.

1.- Obligaciones de las empresas licitadoras y del adjudicatario.

De acuerdo con el Plan de medidas antifraude de ADIF-AV confeccionado con la finalidad de implementar medidas de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, la participación en la licitación a que se refiere el presente pliego, supone la asunción por parte de los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las siguientes obligaciones:

La participación en la licitación a que se refiere el presente pliego supone la asunción por parte de los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las siguientes obligaciones: ...

c) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia, como por ejemplo los comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación de mercados, rotación de ofertas, etc.).

.....

2.- Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento para las empresas licitadoras de las reglas de conducta definidas en esta cláusula puede derivar en causa de exclusión en la participación del procedimiento de licitación correspondiente, así como, caso de que concurran los supuestos contemplados en la legislación vigente, en causa prohibición de contratar.

*En relación con la empresa adjudicataria, las reglas de conducta definidas en esta cláusula tienen la consideración de obligaciones esenciales, y su infracción se califica como infracción muy grave, quedando facultada la Entidad Contratante para, en función de las circunstancias que concurran y teniendo en cuenta los principios de graduación de la sanción, contradicción y proporcionalidad, **bien imponer una penalidad** de hasta el 10% del precio del contrato (IVA no incluido) por cada incumplimiento, sin que el total de las mismas pueda superar el 50% del precio del contrato, bien por **resolver el contrato** por causa imputable al contratista con los efectos correspondientes. Las anteriores penalidades son independientes del deber **de resarcimiento de los daños y perjuicios** que las conductas contrarias a lo establecido en la presente cláusula hayan ocasionado a la Entidad Contratante.*

El incumplimiento de estas obligaciones podrá, en los supuestos contemplados en la legislación vigente, constituir causa de prohibición de contratar.

Y en la cláusula 39 del pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) referido a “Causas de resolución del contrato” se establece como causa de resolución el incumplimiento de la siguiente obligación esencial:

“Cláusula 39. Resolución del contrato.

Además de las generales previstas en el derecho privado, las previstas en el RDL 3/2020, en Anexo de Condiciones Generales y en el presente pliego, serán causas de resolución del contrato las siguientes:

*- Los incumplimientos de las obligaciones que, en el apartado IV.3 del Cuadro de características, se hubieran calificado como **condiciones especiales del contrato**.*

.....

-El contratista adjudicatario estará obligado durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación a mantenerse en situación de no incurso en prohibición de contratar. Cuando el contratista, tras la formalización del contrato, durante su ejecución o antes de su liquidación, hubiera sido declarado en prohibición de contratar con esta Entidad o con el Sector Público Estatal, así como cuando de forma sobrevenida a la formalización contractual se encuentre incurso en prohibición de contratar, la Entidad quedará facultada para resolver el contrato.”

Además, el **Apartado IV.3.7** del Cuadro de Características (CC) a las “obligaciones esenciales” relativas a la integridad y lucha contra el fraude les da la doble condición de “condición de ejecución del contrato” al establecer lo siguiente:

“3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

7. El cumplimiento de las obligaciones de integridad y lucha contra el fraude de las empresas licitadoras y del adjudicatario (art. 29 del RDL 3/2020 y Clausula 29 del PCP) es una condición especial de ejecución.”

Como se puede ver, se introduce en el Pliego, unas obligaciones, que se elevan a la categoría de “condición de ejecución del contrato” u “obligación esencial” consistente en la obligación de “*abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir,*

restringir o falsear la competencia” y mantenerse “no incurso en prohibición de contratar” durante el periodo de ejecución del contrato y hasta su liquidación.

En primer lugar, la redacción de las *“obligaciones esenciales”*, adolece de falta de concreción, y por ende de seguridad jurídica, máxime tratándose de derecho administrativo sancionador o, cuanto menos, regulador de penalidades. La condición de *“abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia”* y de mantenerse *“en situación de no incurso en prohibición de contratar”* no es compatible con la regulación que hace la LCSP de las prohibiciones de contratar: O se declara la prohibición de contratar con su duración y publicación o la misma carece de virtualidad para el contrato en vigor.

No llegamos a advertir ni a tomar razón del sentido de la frase *“abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia”* y *“en situación de no incurso en prohibición de contratar”*, ya que es necesario, al menos, una resolución administrativa o sentencia que establezcan el alcance y la duración. Y como se establece en el artículo 72.2 LCSP:

“En el caso de que la sentencia o la resolución administrativa no contengan pronunciamiento sobre el alcance o duración de la prohibición de contratar; el alcance y duración de la prohibición deberá determinarse mediante procedimiento instruido al efecto, de conformidad con lo dispuesto en este artículo”

Los artículos 71 y siguientes regulan el procedimiento y la fecha de inicio para que la prohibición de contratar tenga efectos. Y así, finalmente el artículo 73.3 y 4 LCSP a la hora de declarar los efectos establece:

*“3. Las prohibiciones de contratar contempladas en las letras a) y b) del apartado primero del artículo 71 **producirán efectos desde la fecha en que devinieron firmes la sentencia o la resolución administrativa en los casos en que aquella o esta se hubieran pronunciado sobre el alcance y la duración de la prohibición.***

En el resto de supuestos, los efectos se producirán desde la fecha de inscripción en el registro correspondiente.

*No obstante lo anterior, en los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado primero del artículo 71 en los casos **en que los efectos de la prohibición de contratar se produzcan desde la inscripción en el correspondiente registro, podrán adoptarse, en su caso, por parte del órgano competente para resolver el procedimiento de determinación del alcance y duración de la prohibición, de oficio, o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera adoptarse.***

*4. Las prohibiciones de contratar cuya causa fuera la prevista en la letra f) del apartado primero del artículo 71, producirán efectos respecto de las Administraciones Públicas **que se establezcan en la resolución sancionadora que las impuso, desde la fecha en que esta devino firme.”***

Por lo tanto, la mera situación de *“abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia”* y permanecer *“no incurso en prohibición de contratar”* no se entiende sin que se hayan cumplido los siguientes requisitos; 1) instrucción del expediente sancionador, 2) firmeza de la resolución, y 3) inscripción en el correspondiente registro. Y todas estas fases se están obviando, en perjuicio del contratista, en esta obligación esencial.

La extensión de las prohibiciones de contratar a todo el sector público, más allá del ámbito del órgano de contratación, precisa de una norma aprobada por el ministro de Hacienda y Función Pública, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y a solicitud de la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente en los casos en que la prohibición de contratar provenga de tales ámbitos.

La mayoría de las prohibiciones de contratar declaradas se han de comunicar para su inscripción al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el equivalente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y los efectos de estas prohibiciones de contratar se producen desde la fecha de la inscripción.

Por lo tanto, declarar en el PCAP que se podrán imponer penalidades, por no *“abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia”* y por no mantenerse en *“situación de no incurso en prohibición de contratar”*, infringe las normas imperativas, dispuestas en los artículos 72 y 73 de la LCSP, que prescriben para las prohibiciones de contratar procedimientos previos de declaración de alcance y ámbito y de extensión de ámbito y que sin la inscripción en los Registros de licitadores no producen efectos.

Procede pues, la nulidad de las mencionadas cláusulas por incumplir los preceptos 71 y ss de la LCSP y por vulnerar los arts. 72 y 73 LCSP.

SEGUNDA.- *Multiplicidad de sanciones. Principio “no bis in idem”.*

A la situación de la empresa adjudicataria de *“abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia”* y estar *“en situación de no incurso en prohibición de contratar”*, se le aplican una serie de consecuencias jurídicas y penalizaciones, más allá de lo establecido en la Ley, y totalmente desproporcionadas con infracción de lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley 3/2020 relativo a los Principios de igualdad, transparencia y libre competencia y, en cuya virtud Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad.

Así, si se incumplieran estas obligaciones esenciales del contrato, tienen unas desproporcionadas consecuencias jurídicas:

- Multa de hasta el 10 % del importe del contrato.
- Resolución del contrato.
- Prohibición de contratar.
- Obligación de resarcir daños y perjuicios.
- Las de la cláusula 30 del pliego. (por su consideración de *“condición de ejecución del contrato”*)

En primer lugar, la **multa**, nos encontramos que la **cláusula 29.2** del PCAP determina la imposición de penalidades por incumplimiento de las obligaciones esenciales con una cuantía, como regla general, que alcanzan hasta el máximo del 50% del importe del contrato.

En segundo lugar, la **resolución del contrato**, la cláusula 29.2 del Pliego considera como causa de resolución situación de la empresa adjudicataria de no *“abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia”*. En consecuencia, según estas cláusulas, ADIF **va a poder imponer, además de las penalidades, la**

resolución del el contrato, sin tan siquiera precisarse la declaración de la prohibición de contratar, teniendo la facultad, el órgano de contratación, para comprobar en cualquier momento durante la ejecución del contrato que el contratista se mantiene en “*situación de no incurso en prohibición de contratar*” y, en todo caso, existe el deber para el órgano de contratación de comprobarlo al tiempo de la recepción de los trabajos realizados.

Este efecto de imponer sanciones y de resolver el contrato, **es nulo de pleno derecho** (Art. 47.2 Ley 39/2015 y Art. 39.1 de la LCSP), ya no solo porque retrotrae la aplicación de una disposición sancionadora no favorable, sino que retrotrae la aplicación de una disposición restrictiva de derechos individuales, al hacer depender la aplicación de la misma, y de sus efectos punitivos (penalidades y resolución) a un hecho incierto, probable o no y desconocido en el momento de la formalización del contrato.

Las prohibiciones de contratar afectan a la aptitud del contratista para contratar **a partir del momento de su inscripción** en el correspondiente Registro de licitadores o a partir de la sentencia firme o resolución administrativa firme, por las conductas tipificadas en el Art. 71 al 73 LCSP, si hubiesen fijado la duración y alcance de la prohibición. Es a partir de ese momento cuando producen efectos e impiden la aptitud para formalizar un contrato del sector público. Con efectos anteriores a ese momento no tienen efectos retroactivos (en este sentido, se ha pronunciado la JCCPE, como se refiere a continuación.

Y por último las sanciones derivadas del artículo 30 del pliego que concede a estas *obligaciones esenciales* el carácter, además de *condición de ejecución del contrato*, y que establece, nuevamente, penalidades de hasta el 10% del importe del contrato, en particular se indica:

“Cuando en el apartado IV.3 del Cuadro de características se hayan calificado como condición especial de ejecución alguna o algunas de las obligaciones citadas en dicho apartado, su incumplimiento dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:

– Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.”

Por lo tanto, por desproporcionada, procede la declaración de nulidad de estas obligaciones esenciales del contrato.

TERCERA- Quiebra del principio de seguridad jurídica (Art. 9.3 CE y del Art. 39.2 Ley 39/2015 y 140 L.C.S.P)

La propia LCSP, respecto a las prohibiciones de contratar, tiene establecido un ámbito temporal, para que puedan haber sido hechas efectivas, y que se recoge en el artículo 140.4 que indica:

*4. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia **y ausencia de prohibiciones de contratar** a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.*

Y, como vemos, el pliego intenta llevar sus efectos, mucho más allá del momento de la perfección del contrato. Además, todo depende, como hemos dicho, de que las prohibiciones de contratar, sean debidamente publicadas. Cuestión esta que no es una especialidad del derecho contractual público, sino que se trata de un principio de derecho administrativo, relativo a la eficacia de los actos administrativos, recogido en el artículo 39 de la Ley 39/2015:

“Artículo 39. Efectos.

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.”

Las relaciones y obligaciones esenciales que nacen de un contrato de obra, ejecución de las prestaciones por el contratista y abono del precio por el órgano de contratación, quedan supeditadas en el presente PCAP, en el momento de la formalización del contrato, a la circunstancia de que el contratista, que en el momento de la formalización de contratar no se encontraba incurso en prohibición de contratar, en un momento futuro, en un contrato con un plazo de ejecución de más de sesenta meses, pueda considerar el órgano de contratación que está incurso en algún incumplimiento administrativo que diera lugar a una prohibición de contratar, tras una de las comprobaciones a las que le faculta el PCAP.

Es decir, de una circunstancia inexistente al tiempo de la formalización del contrato, puede derivar la resolución del mismo, la imposición de penalidades y, esencialmente, las relaciones jurídicas (derechos y obligaciones) surgidas en el instante de la formalización contractual.

CUARTA.- *Incumplimiento de la ley 3/2020 en cuanto a la configuración de una causa de resolución del contrato. No cabe establecer como causa de resolución del contrato la incursión sobrevenida del contratista en causa de prohibición de contratar.*

La cláusula 39 relativa a la resolución del contrato establece como causa que la justifique lo siguiente:

*“El contratista adjudicatario estará obligado durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación a mantenerse en situación de no incurso en prohibición de contratar. Cuando el contratista, tras la formalización del contrato, durante su ejecución o antes de su liquidación, hubiera sido declarado en prohibición de contratar con esta Entidad o con el Sector Público Estatal, así como cuando de forma sobrevenida a la formalización contractual se encuentre incurso en prohibición de contratar, la Entidad quedará facultada para **resolver el contrato.**”*

Y, como vemos, el pliego es un contrato de adhesión, la jurisprudencia tiene muy matizado el principio de libertad de pactos en el ámbito del derecho administrativo. Pero el mayor incumplimiento se da, en cuanto que se introduce una obligación declarada esencial consistente en, la *“obligación durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación de mantenerse en situación de no incurso en prohibición de contratar”* que, ni es clara, ni es precisa, ni es inequívoca, por lo que procede su declaración de nulidad.

En el **derogado** Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (**no** aplicable al expediente objeto del recurso), en el Art. 223, además de una serie de causas tasadas para la resolución de los contratos, como *numerus apertus*, el legislador, en su letra h, establecía como causa de resolución del contrato “*las establecidas expresamente en el contrato*, posibilitando las causas de resolución del contrato en la documentación contractual (PCAP y contrato).

Sin embargo, al ser esta regulación totalmente incompatible con las Directivas, en la vigente LCSP de 2017, ya no se establece en el Art. 211, para todo tipo de contrato, una causa de resolución genérica que posibilite al PCAP o al contrato introducir aquellas que considere convenientes, al determinar un *numerus clausus* de causas resolutorias de los contratos. Ni tampoco habilita esta posibilidad la Ley 3/2020 de aplicación al presente procedimiento.

Esta fundamentación viene recogida por el Consejo Consultivo de Andalucía, en su Dictamen Núm.: 639/2019, de 3 de octubre:

“La cláusula 41.h) del Pliego prevé la resolución en caso de “abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato.

*Como este Consejo ha recordado, **el contrato no puede prever específicas causas de resolución distintas de las contempladas legalmente, pues las causas de resolución de los contratos son las específicamente establecidas en la LCSP (arts. 211 y 245, entre otros) al haberse eliminado en la nueva LCSP como causas de resolución “las establecidas expresamente en el contrato”.***

Procede por este motivo la declaración de nulidad de la cláusula 39.

QUINTA.- *Quebranto del principio de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales y de los actos que no producen efectos favorables a los interesados. Vulneración de los Art. 9.3 CE, Art. 39.3 Ley 39/2015, Art. 26 Ley 40/2015 y Arts. 72 y 73 LCSP.*

Recapitulando, la cláusula 29.2 y 39 del PCAP;

- Establece como obligaciones esenciales unos hechos futuros (“*la obligación de abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia” y mantenerse “no incurso en prohibición de contratar” durante el periodo de ejecución del contrato*”)
- Que, además, no es preciso que se declaren en un acto administrativo definitivo y firme.
- Cuyo incumplimiento producirá el efecto de imponer sanciones y de resolver el contrato.

Por lo tanto, es nula de pleno derecho (Art. 47.2 Ley 39/2015 y Art. 39.1 de la LCSP), no solo porque retrotrae la aplicación de una disposición sancionadora no favorable, sino que retrotrae la aplicación de una disposición restrictiva de derechos individuales, al hacer depender la aplicación de la misma, y de sus efectos punitivos (penalidades y resolución) a un hecho incierto, probable o no y desconocido en el momento de la formalización del contrato.

Las prohibiciones de contratar afectan a la aptitud del contratista para contratar a partir del momento de su inscripción en el correspondiente Registro de licitadores o a partir de la sentencia firme o resolución administrativa firme, por las conductas tipificadas en el Art. 71 al 73 LCSP, si

hubiesen fijado la duración y alcance de la prohibición. Es a partir de ese momento cuando producen efectos e impiden la aptitud para formalizar un contrato del sector público.

Una parte de las prohibiciones de contratar previstas en la LCSP requiere procedimiento instruido al efecto en el que se declare su alcance y duración.

La extensión de las mismas a todo el sector público, más allá del ámbito del órgano de contratación, precisa de una norma aprobada por el Ministro de Hacienda y Función Pública, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y a solicitud de la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente en los casos en que la prohibición de contratar provenga de tales ámbitos.

La mayoría de las prohibiciones de contratar declaradas se han de comunicar para su inscripción al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el equivalente en el ámbito de las Comunidades Autónomas. Los efectos de estas prohibiciones de contratar se producen desde la fecha de la inscripción.

Por lo tanto, declarar en el PCAP que se podrán imponer penalidades, hasta un diez por ciento por cada una y con un límite del 50 por ciento del precio del contrato, o resolver el contrato, si el contratista adjudicatario, tras la formalización del contrato, durante su ejecución y hasta su liquidación no se mantiene en situación de “no incurso en prohibición de contratar”, o incumple la obligación de “abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia” durante el periodo de ejecución del contrato infringe las normas imperativas, dispuestas en los artículos 72 y 73 de la LCSP, que prescriben para las prohibiciones de contratar procedimientos previos de declaración de alcance y ámbito y de extensión de ámbito y que sin la inscripción en los Registros de licitadores no producen efectos las prohibiciones de contratar declaradas.

Con efectos anteriores a ese momento no tienen efectos retroactivos. En este sentido, se ha pronunciado la JCCPE, como se refiere a continuación, respecto de los efectos de la prohibición de contratar con una empresa respecto de contratos en licitación y en ejecución.

Así, la JCCPE en su Informe 45/13, en el que declara que “el hecho de que se acuerde prohibición de contratar afecta a la aptitud del contratista para contratar que a partir de ese momento carecerá de ella según el artículo 54 del TRLCSP; no así a los contratos de los que resulte adjudicatario en un momento anterior, aunque consecuencia del incumplimiento de cualesquiera de ellos, incurra en prohibición de contratar”; para añadir que “los efectos de la prohibición de contratar se producen desde la fecha en que se inscribe la misma en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Contratistas del Estado, sin que llegue a producir eficacia retroactiva respecto de los contratos que están en vigor en el momento en que se acuerde aquélla. La prohibición de contratar, con independencia de las causas comprendidas en el artículo 60 del TRLCSP, implicará que el empresario no puede resultar adjudicatario de nuevos contratos posteriores a la misma, al carecer de aptitud para contratar (artículo 54 del TRLCSP)” (el énfasis es nuestro).

La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre del 2021 ha declarado que “la prohibición de contratar, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 71.1.b) y 72 de la Ley de contratos del sector público, no es ejecutiva por el hecho de la simple imposición de la sanción por el órgano competente cuando en la misma no se establece su alcance y duración, siendo preciso en

estos casos que por el Ministerio de Hacienda se dicte resolución que determine tales extremos y sea inscrita en el Registro Oficial de Licitadores.”

Como venimos argumentando, se pronuncia el Tribunal Supremo: “Así pues, la conclusión es que **los efectos de la prohibición de contratar solo se producen, y la prohibición solo es ejecutiva, desde el momento en el que se concreta su alcance y duración**, bien en la propia resolución sancionadora, bien a través del correspondiente procedimiento y, en este último caso, una vez inscrita en el Registro anteriormente citado.”

La cuestión de las prohibiciones para contratar, que puede implicar la exclusión de las empresas de la contratación pública, constituye una de las medidas sancionadoras más graves que pueden adoptar los órganos de contratación, y además, esta inhabilitación para celebrar contratos públicos supone una medida negativa que puede poner en riesgo la viabilidad de la empresa afectada.

Por ello, dada su condición de medida limitadora de derechos, debe realizarse **una interpretación restrictiva de su regulación**. No se puede resolver un contrato en el que, una vez formalizado, el contratista no haya sido declarado en prohibición de contratar, siguiendo el procedimiento legalmente establecido.

Como la prohibición de contratar no produce eficacia retroactiva respecto de los contratos que están en vigor y necesita la inscripción en el registro oficial correspondiente, no se puede resolver un contrato en el que, previamente a su formalización, el contratista no fue declarado en prohibición de contratar, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, con inscripción posterior.

Incurrir en prohibición para contratar (o ser declarado en la misma e inscrita la declaración) una vez formalizado el contrato no puede ser motivo para resolver el contrato, únicamente tendrá efectos sobre futuras adjudicaciones, pero no sobre los contratos en ejecución.

Como establece la JCCP (Informe 45/13): “los efectos de la prohibición de contratar se producen desde la fecha en que se inscribe la misma en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Contratistas del Estado, **sin que llegue a producir eficacia retroactiva respecto de los contratos que están en vigor en el momento en que se acuerde aquélla**. La prohibición de contratar, con independencia de las causas comprendidas en el artículo 60 del TRLCSP, implicará que el empresario no puede resultar adjudicatario de nuevos contratos posteriores a la misma, al carecer de aptitud para contratar (artículo 54 del TRLCSP).”

Procede, pues, la declaración por estos motivos de la nulidad del pliego.

SEXTA- *Inadecuación de la causa de resolución al objeto del contrato vulneración del art. 105 de la Ley 3/2020 en relación con el artículo 66.6.*

Al introducirse toda la cláusula 29 en el PCAP como *condición especial de ejecución*, calificada como *especial*, a efectos de producir la posible resolución del contrato, está sujeta al Art. 105 de la Ley 3/2020 que admite que se incluyan este tipo de condiciones por los órganos de contratación, **únicamente en el supuesto de que estén vinculadas al objeto del contrato**, en el sentido del artículo 66.6.

Y, en ningún caso, cualquier conducta de la empresa que, en el ámbito general de su actividad, de lugar a una prohibición de contratar, esta directamente vinculada a la ejecución del contrato. Se pueden tratar de conductas totalmente ajenas al contrato. Ejemplo: Un accidente laboral grave en Pontevedra, pondría a la empresa en situación de estar incurso en prohibición de contratar (por infracción de normativa laboral) y no tendría nada que ver con la ejecución de las nuevas vías de la Estación de Chamartín.

En el Art. 105 de la Ley 3/2020 se determina que sólo se puede “establecer alguna condición especial relativa a la ejecución del contrato siempre que estén **relacionados con el objeto del contrato**.”

El Informe 59/19 y el Informe 1/2020 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (JCCPE), en interpretación del Art. 202 de la LCSP, señala que para la admisibilidad de las condiciones establecidas por el artículo 202 LCSP se ha de cumplir con una serie de condiciones, entre ellas:

1. Guardar relación con la ejecución del contrato.
2. Estar vinculadas con su objeto.

Como establece el propio Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en varias de sus resoluciones, por ejemplo, en la Resolución 489/2019, de 9 de mayo:

*“En el caso de las condiciones especiales de ejecución **la vinculación al objeto del contrato se cumple por el hecho de que la condición se efectúe durante el cumplimiento y en la ejecución de la prestación contratada, no en otra**. En este sentido se pronuncia la Directiva 2014/24 en sus Considerandos y la “Guía para considerar los aspectos sociales en las contrataciones Públicas” elaborada la Comisión Europea en 2010. En ella se especifica que **el requisito de la vinculación al objeto del contrato se cumple en las condiciones especiales de ejecución cuando éstas se efectúan o realizan en el cumplimiento de la prestación objeto del contrato, no en otra**.”* (el énfasis se realiza por esta parte)

La resolución 911/2019 del TACRC explica, en esta misma línea (relacionado con la inclusión como condición especial de un seguro y su vinculación o no con el objeto del contrato y si guarda relación con su ejecución) dispuso *“que no existe vinculación con el objeto del contrato cuando se exige como condición especial de ejecución del contrato la suscripción de una póliza con un ámbito de cobertura **que no es el propio de tal ejecución**, alcanzando a riesgos distintos cuya cobertura no se puede imponer al contratista”* (la enfatización es nuestra).

El pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares para la *ejecución de Proyectos de construcción del nuevo canal de acceso para la integración de la Alta Velocidad en la ciudad de Valencia, de la ampliación y remodelación de la Estación de Valencia – Joaquín Sorolla* define el objeto del contrato en su cláusula primera del Cuadro de Características:

“El alcance del contrato es la ejecución de las obras de los siguientes proyectos de construcción:

- 1) PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CANAL DE ACCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA.
- 2) PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE VALENCIA - JOAQUÍN SOROLLA.
- 3) PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE VALENCIA – JOAQUÍN SOROLLA.

La actuación se emplaza en el término municipal de Valencia. Se inicia en los túneles ya ejecutados del Nudo Sur, a la altura de la Avda Fernando Abril Martorel, prolongándose hasta Giorgeta hasta conectar con la estación actual de Joaquín Sorolla y Valencia Norte.

La solución incluida en los tres proyectos de construcción incluye el soterramiento de todas las vías de acceso a las estaciones de Valencia Norte y Joaquín Sorolla, dando continuidad a los túneles ya ejecutados del Nudo Sur, la ampliación y remodelación del edificio de viajeros de la actual estación de Joaquín Sorolla y ampliación del aparcamiento para adecuarse a la nueva playa de vías y andenes definidas en el proyecto del Nuevo Canal de Acceso.”

Además El Art. 105 de la Ley 3/2020 no incluye la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual, tan sólo establece criterios medioambientales, sociales y relacionados con la innovación, esto no puede interpretarse que, como condición especial de ejecución, pueda incluirse cualquier conducta de la empresa que, en el ámbito general de su actividad, haya dado lugar a una prohibición de contratar. Sino que debería haberse articulado de forma que la conducta que da lugar a la prohibición de contratar esté directamente vinculada al objeto del contrato, la *Ejecución de Proyectos de construcción del nuevo canal de acceso para la integración de la Alta Velocidad en la ciudad de Valencia, de la ampliación y remodelación de la Estación de Valencia – Joaquín Sorolla*, tal y como viene definido en las cláusulas del PCAP descrita y con motivo de dicha ejecución, que no es como se preceptúa en la cláusula impugnada.

Una condición especial de ejecución de carácter ético que se conceptúa como cualquier conducta de la empresa que, en el ámbito general de su actividad, que haya dado, o pueda dar lugar a una prohibición de contratar, con posterioridad, además, a la formalización del contrato, no guarda relación con su ejecución, si no se especifica que va ligada a esa ejecución, y no está relacionada con el objeto del contrato. Y, a la vista está, que esta condición especial de ejecución del contrato, en nada está vinculada a la ejecución del contrato por lo que procede su declaración de nulidad.

SEPTIMA.- *Compromiso desorbitante de adscripción de los **medios MATERIALES**. Vulneración de los principios de proporcionalidad, igualdad y no discriminación y de libre concurrencia.*

En el pliego que se recurre tenemos una restricción a los licitadores para ser admitido a la licitación. Además de tener que estar inscrito en el Registro del Licitadores, -ROLECE- y disponer de las habilitaciones:

- B-2 Categoría: 6
- C-3 categoría 6.
- D-4 categoría 2
- C-4 categoría 3

Además de comprometerse a adscribir TODOS Y CADA UNO de los medios personales recogidos en el punto 3.4 del apartado II del cuadro de características (CC), además también se exige adscribir al contrato toda una serie de medios materiales que no son razonables, proporcionados ni se justifican suficientemente.

Se trata de lo establecido en el punto 3.4 del Apartado II, del Cuadro de Características del PCAP, - MEDIOS MATERIALES- que indica:

« **MEDIOS MATERIALES:**

Requisitos mínimos:

Los medios ofertados deberán identificarse adecuadamente y adscribirse al contrato objeto de esta licitación y serán aportados a medida que sea necesaria su utilización, acreditándose mediante declaración responsable suscrita por el firmante de la oferta.

Será necesaria la adscripción al contrato durante la ejecución de la obra a medida que sean necesarios, la maquinaria, equipos y medios auxiliares indicados en el PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO CANAL DE ACCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA.

La maquinaria referenciada será apta para la ejecución de la obra objeto del contrato. El licitador propondrá la maquinaria y equipos necesarios para cumplir con el Plan de Obra cuya relación completa puede encontrarse en el "Anejo 23 Justificación de Precios" de la memoria del proyecto.

Asimismo, será necesaria la adscripción al contrato durante la ejecución de la obra a medida que sean necesarios, la maquinaria, equipos y medios auxiliares indicados en el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE VALENCIA - JOAQUÍN SOROLLA. El licitador propondrá la maquinaria y equipos necesarios para cumplir con el Plan de obra establecido cuya relación completa puede encontrarse en el Anejo 22 Justificación de Precios de la memoria.

Será necesaria la adscripción al contrato durante la ejecución de la obra a medida que sean necesarios, la maquinaria, equipos y medios auxiliares indicados en el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE VALENCIA – JOAQUÍN SOROLLA. El licitador propondrá la maquinaria y equipos necesarios para cumplir con el Plan de obra establecido cuya relación completa puede encontrarse en el Anejo 19 Justificación de Precios de la memoria.

El licitador presentará en su oferta, el correspondiente certificado de titularidad o arrendamiento de dichos medios para la adscripción al contrato y compromiso de aportarlos durante la ejecución del mismo. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incurso en una prohibición de contratar.

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares, que constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las obras, serán reconocidos por el Director de la Obra a fin de constatar si reúnen las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas condiciones.»

Si bien la LCSP (artículo 76.2) permite a los órganos de contratación exigir a los licitadores, haciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, sin embargo, la propia LCSP (apartado tercero del art. 76) requiere que sea razonable, justificada y proporcional a la entidad y características del contrato, de forma que no limite la participación de las empresas en la licitación.

Exigir la adscripción, como medio de acreditación de la solvencia técnica, de no solo los medios de todo tipo que prevé a pie de obra, durante los SESENTA (60) meses de ejecución de la obra, puede entenderse que es desproporcionado, teniendo en cuenta la clasificación exigida, además que no se justifica esa adscripción desmesurada. Salvo que su finalidad sea limitar la competencia.

El resultado final, es que se exige nada más y nada menos, que los siguientes medios materiales para la ejecución del contrato:

	Total	Maq. Canal de Acceso	Maq. Remodelación Estación	Maq. Ampliación Aparcamiento
MAQUINARIA DE VIA	63	63		
EQUIPOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	84	34	29	21
EQUIPOS DE DEMOLICIÓN	37	21	13	3
EQUIPOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO	26	12	6	8
EQUIPOS DE COMPACTACIÓN	32	18	8	6
EQUIPOS DE HORMIGONADO	28	13	10	5
EQUIPOS DE NIVELADO DE TIERRAS	4	2	1	1
EQUIPOS DE CORTE	21	6	13	2
EQUIPOS DE APRIETE	1	1		
CLAVADORAS	3	2	1	
EQUIPOS DE BOMBEO	5	3	1	1
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN	39	18	15	6
EQUIPOS DE GENERACIÓN DE EN. ELÉCTRICA	8	5	2	1
EQUIPOS DE MEZCLA	7	7		
EQUIPOS DE PERFORACIÓN	7	5	2	
EQUIPOS DE HINCADO	1	1		
EQUIPOS PRETENSADO	1	1		
EQUIPOS TESADO	1	1		
EQUIPOS DE RIEGO	6	4	1	1
EQUIPOS TTO. SUPERFICIES	1	1		
DRENAJE DE AGUAS	1	1		
LIMPIEZA VIALES	7	3	2	2
APEOS	2	1	1	
EQUIPOS DE SOLDADURA	6	4	1	1
EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN VIARIA	4	1	1	2
EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RUIDO	1	1		
TTO. DEL TERRENO	2	1	1	
MAQUINARIA TRASPLANTE	2		1	1
MAQUINARIA ASPIRACION	1		1	
ANCLAJES QUIMICOS	1		1	
TOTAL MAQUINARIA	402	230	111	61

Son, por tanto, 402 equipos técnicos los exigidos a la adscripción del contrato.

Este requisito para completar la clasificación y la solvencia mediante una adscripción de medios materiales tan numeroso y con unas características muy determinadas, y que excluye al licitador que no lo cumpla, vulnera lo dispuesto en el artículo 27 del RDL 3/2020 y 76.3 de la LCSP, así como lo previsto en la Resolución 187/2015 de 18 de noviembre del Tribunal Central de Recursos Contractuales y en la Resolución nº 320/2018, de 10 de octubre de 2018, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, dictada en el Recurso nº 317/2018. Y además los principios generales de la contratación pública de **proporcionalidad**, de igualdad de trato y no discriminación y de libre concurrencia, en cuanto que la adscripción de los medios personales o materiales como requisitos de solvencia adicionales a la clasificación del contratista debe ser razonable, justificada y proporcional a la entidad y características del contrato, de forma que no limite la participación de las empresas en la licitación.

Todas esas exigencias del punto 3.4 del apartado II del Cuadro de Características del PCAP no se ajustan al Artículo 27 del RDL 3/2020 que indica:

“Artículo 27. Principios de la contratación.

1. Los contratos que se adjudiquen y ejecuten en virtud del presente real decreto-ley se ajustarán a los principios de no discriminación, de reconocimiento mutuo, de proporcionalidad, de igualdad de trato, así como al principio de transparencia y de libre competencia.

...

2. En toda contratación sujeta a este real decreto-ley se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del

contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como, en su caso, una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.

3. Se evitará en la contratación cualquier práctica que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación.

La contratación no será concebida con la intención de inaplicar las previsiones de este decreto-ley ni de restringir artificialmente la competencia. Se considerará que la competencia está artificialmente restringida cuando la contratación se haya concebido con la intención de favorecer o perjudicar indebidamente a determinados operadores económicos.

Parece evidente la voluntad de perjudicar con estos criterios tan restrictivos, a las pequeñas y medianas empresas del sector.

También se incumple el apartado 3 del citado artículo 76 LCSP, que indica:

“Artículo 76. Concreción de las condiciones de solvencia.

1. En los contratos de obras, de servicios, concesión de obras y concesión de servicios, así como en los contratos de suministro que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

2. Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos se integrarán en el contrato, debiendo los pliegos o el documento contractual, atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

En el caso de contratos que atendida su complejidad técnica sea determinante la concreción de los medios personales o materiales necesarios para la ejecución del contrato, los órganos contratación exigirán el compromiso a que se refiere el párrafo anterior.

3. La adscripción de los medios personales o materiales como requisitos de solvencia adicionales a la clasificación del contratista deberá ser razonable, justificada y proporcional a la entidad y características del contrato, de forma que no limite la participación de las empresas en la licitación.

Es **doctrina del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid**, en interpretación del antes citado artículo 76.3 de la LCSP, concretada en su **Resolución nº 320/2018** (o en la Resolución nº 187/2015), la siguiente:

<<Como señala la recurrente, el artículo 76.3 de la LCSP determina que “la adscripción de los medios personales o materiales como requisitos de solvencia adicionales a la clasificación del

contratista deberá ser razonable, justificada y proporcional a la entidad y características del contrato, de forma que no limite la participación de las empresas en la licitación”.

*El Tribunal en su Resolución 187/2015, de 18 de noviembre, señaló que “La condición de que el criterio de solvencia sea proporcional al objeto del contrato es un concepto jurídico indeterminado, por lo que, para conocer la admisibilidad, del criterio concreto, es preciso examinar en cada caso si los parámetros establecidos en el pliego son objetivamente admisibles **por guardar la debida proporcionalidad con el objeto del contrato**, sin que en abstracto pueda establecerse un porcentaje o cuantía que pueda concretar tal proporcionalidad. La proporcionalidad viene dada por la relación entre lo que se exige como requisito de solvencia y la complejidad técnica del contrato y su dimensión económica, u otras circunstancias semejantes, dado que **una exigencia desproporcionada afectaría a la concurrencia empresarial en condiciones de igualdad”.***

*El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas si bien se refiere a las medidas de exclusión de licitadores por causas basadas en consideraciones objetivas y relacionadas con la aptitud profesional enumeradas en el artículo 24 de la Directiva 93/37, en sus Sentencias de 16 de diciembre de 2008 (TJCE/2008/312) Michaniki AE contra Ethniko Symvoulío Radiotileorasis y la Sentencia Caso Assitur contra Camera di Comercio; Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano de 19 de mayo de 2009 (TJCE/2009/146) se refiere al **principio de proporcionalidad en la adopción de medidas de exclusión**, señalando que en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, constituye un principio general del Derecho comunitario el principio de proporcionalidad y que las medidas que se adopten para garantizar la observancia de los principios de igualdad de trato entre los licitadores y de transparencia, no deben exceder de lo necesario para alcanzar el objetivo”.*

Ni en este documento publicado -el Pliego- ni en otros documentos contractuales publicados en la Plataforma, ni en el expediente, se hace referencia a la justificación de esa adscripción de medios materiales que consideramos desproporcionada. Es más, del punto 3.4 apartado II del Cuadro de Características del PCAP resulta una clasificación exigida como requisito de solvencia técnica de los licitadores la clasificación en los subgrupos: B-2 categoría 6, C-3 categoría 6, D-4 categoría 2, y C-4 categoría 3 para ejecutar sin límite presupuestario.

De ahí que, además, exigir la adscripción de forma permanente durante la ejecución de los trabajos, de 402 equipos de medios materiales, **es absolutamente desproporcionado**, teniendo en cuenta la clasificación exigida. (Para la cual, por cierto, la empresa licitadora ya ha tenido que acreditar que dispone de los medios materiales necesarios para ejecutar el contrato en cuestión.)

Por lo tanto, la adscripción de forma permanente durante la ejecución de los trabajos, de los anteriores medios materiales, en cuanto al importe del valor estimado de la licitación, al plazo de ejecución y la complejidad de la obra, como obligación de solvencia adicional a la clasificación del contratista **no es razonable, ni justificada ni proporcional a la entidad y características del contrato**, de manera que **limita la participación de las empresas en la licitación y resulta un impedimento a la libre concurrencia**, pues no es una exigencia debidamente justificada y equilibrada respecto a las prestaciones del contrato y no es proporcional a la entidad y características del contrato.

Lo que hace ADIF es que no se está valorando a la oferta, lo que se está haciendo es valorar a la empresa, cuestión esta proscrita ya desde el artículo 27 del RDL 3/2020 y que también va en contra del artículo 1 de la LCSP:

“Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.”

En consecuencia, por su disconformidad a derecho y con el ordenamiento jurídico, procede **declarar la nulidad** del punto 3.4 del apartado II del Cuadro de Características del PCAP en cuanto exige para participar en la licitación, además de la clasificación requerida como requisito de solvencia de los licitadores en los grupos, subgrupos y categorías, una excesiva y desproporcionada adscripción de medios materiales .

Por todo lo expuesto

SOLICITO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES: Que tenga por presentado en forma este escrito, se tenga por interpuesta RECLAMACIÓN en materia de contratación contra, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de ADIF-PRESIDENCIA para la “PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CANAL DE ACCESO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA, DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE VALENCIA – JOAQUÍN SOROLLA Y DE LA AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DE VALENCIA – JOAQUÍN SOROLLA”, y proceda a la declaración de nulidad del pliego por no ajustarse a la legalidad las condiciones de ejecución y las obligaciones esenciales contenidas en las cláusulas 29 y 39 del pliego, ni el punto 3.4 del apartado II en cuanto a la exigencia de medios materiales.

OTROSI PRIMERO DIGO: *Suspensión del procedimiento de licitación.*

Tratándose en el presente recurso la cuestión relativa a la falta de seguridad jurídica, y de la vulneración de los principios de proporcionalidad en la formalización de las cláusulas del pliego, consideramos que se cumple el supuesto del artículo 120 de la Ley 3/2020 y 25 del R.D. 814/2015 para que, por el Tribunal se acuerde de oficio, como medida cautelar, la suspensión del procedimiento.

Madrid a diecinueve de agosto de dos mil veintidós.